



162

Dra. Claudia Liliana Restrepo Espinosa
Abogada Titulada
Universidad Central del Valle del Cauca

Señor (a)
Juzgado Administrativo Oral del Circuito (Reparto)
Guadalajara de Buga – Valle
E. S. D.

Medio de Control: Reparación Directa.

Demandantes: Oscar Fernando Londoño Castaño y otros.

Demandado: Nación - Rama Judicial - Fiscalía General de la Nación.

Es mi nombre, **CLAUDIA LILIANA RESTREPO ESPINOSA**, mayor de edad y vecina de la ciudad de Tuluá Valle, identificada con la C.C No. 29.873.663 de Tuluá Valle, Abogada titulada y en ejercicio con T.P No 173108 del Consejo Superior de la Judicatura, obrando de conformidad con el poder especial, amplio y suficiente que me han conferido los señores **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** identificado con C.C No. 9.734.136 de Armenia Quindío, **LUZ ESTELLA FERNÁNDEZ CORRALES** C.C No. 31.570.852 de Cali (V) en nombre propio y en representación legal del menor **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNÁNDEZ**, **CARLOS LONDOÑO MARULANDA** C.C No. 12.455.198 de San Alberto Cesar y **MARÍA OFELIA CASTAÑO VILLA** C.C No. 42.498.545 de Valledupar Cesar en nombre propio y en representación legal de la menor **KISSENA LONDOÑO CASTAÑO** y **LUIS ALFREDO CASTAÑO IBARRA** C.C No. 1.094.884.264 de Armenia Quindío, por medio del presente escrito, con todo respeto, acudo ante este Despacho, en ejercicio **DEL MEDIO DE CONTROL DE REPARACIÓN DIRECTA** consagrado en el artículo 140 del Código Contencioso Administrativo (LEY 1437 de 2011), **DEMANDAMOS a la Nación-Rama Judicial representada por el señor Director Ejecutivo de la Administración Judicial Seccional – Valle del Cauca, designado para la Representación Judicial de la Nación-Rama Judicial ante lo contencioso administrativo y a la Nación - Fiscalía General de la Nación o a su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo**, previos los trámites del proceso ordinario contencioso-administrativo, surtido con citación y audiencia del señor **Agente del Ministerio Público y del delegado de La Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado**, para que se ordene la **REPARACION DIRECTA**, a cargo de la Nación Rama Judicial y Nación Fiscalía General de la Nación, equivalente a la indemnización integral de los perjuicios causados por hechos u omisiones que deben derivar responsabilidad del Estado, para que en sentencia de merito se pronuncien sobre las siguientes:

DECLARACIONES Y CONDENAS

Primera. La Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación, representadas en este caso por el Director Ejecutivo de la Administración Judicial y el Fiscal General de la Nación, respectivamente, o por sus delegados para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, son responsables administrativamente por los perjuicios patrimoniales y extrapatrimoniales o inmateriales causados a los señores **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, en calidad de procesado por la justicia penal ordinaria, y absuelto de todos los cargos (Acta de audiencia de Preclusión No 081 de 2014 Juzgado Tercero Penal del circuito de Tuluá, de fecha 05 de marzo de 2014, ejecutoriada el 05 de marzo de 2014), su compañera permanente **LUZ ESTELLA FERNÁNDEZ CORRALES** en nombre propio y también en representación legal de sus menores hijos **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNÁNDEZ** (Hijastro del afectado), sus padres **CARLOS LONDOÑO MARULANDA y MARÍA OFELIA CASTAÑO VILLA** en nombre propio y en representación legal de la menor **KISSENA LONDOÑO CASTAÑO** (Hermana del afectado) y su hermano **LUIS ALFREDO IBARRA CASTAÑO**, por la detención injusta e ilegítima que sufriera el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**.

Segunda. Condenar, en consecuencia de la anterior declaración a **La Nación – Rama Judicial – Fiscalía General de la Nación**, representadas en este caso por el Director Ejecutivo de la Administración Judicial y el Fiscal General de la Nación o por sus delegados para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, como reparación del daño antijurídico ocasionado, a pagar al señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, o a quien represente sus derechos, los perjuicios patrimoniales – daño emergente, los cuales se estiman en **DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000,00) M/CTE**, y extrapatrimoniales o inmateriales, los cuales se estiman como mínimo en la suma de **OCHENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$86.902.250,00) M/CTE**, para un total de **NOVENTA Y OCHO MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$98.902.250,00) M/CTE**, de conformidad con lo previsto en el Acta No 23 del 25 de Septiembre de 2013 emanado de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso.

Tercera. Condenar, en consecuencia de la anterior declaración a **La Fiscalía General de la Nación**, representadas en este caso por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, como reparación del daño antijurídico ocasionado, por la detención que sufriera su compañero permanente el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, a pagar a la señora **LUZ ESTELLA FERNÁNDEZ CORRALES** en nombre propio y también en representación legal de sus menor hijo **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNÁNDEZ**

(Hijastro del afectado), a la primera en **TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES** y al menor en **TRES Y MEDIO SALARIOS MINIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES**, o a quien represente sus derechos por los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales actuales y futuros, los cuales se estiman en un total de **TREINTA Y OCHO Y MEDIO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. (\$24.807.475.00=M/C.)**, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso, actualizada al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A.

Cuarta. Condenar, en consecuencia de la anterior declaración a **La Fiscalía General de la Nación**, representadas en este caso por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, como reparación del daño antijurídico ocasionado, por la detención que sufriera su hijo el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, a pagar a **CARLOS LONDOÑO MARULANDA y MARÍA OFELIA CASTAÑO VILLA** en nombre propio y en representación legal de la menor **KISSENA LONDOÑO CASTAÑO** (Hermana del afectado) a cada uno en proporciones iguales, o a quien represente sus derechos por los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales actuales y futuros, los cuales se estiman en cuantía superior a los **CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. (\$64.435.000.00=M/C.)**, para un total de **SESENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS CINCUENTA PESOS (\$67.656.750.00.)**, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso, actualizada al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A.

Quinta. Condenar, en consecuencia de la anterior declaración a **La Fiscalía General de la Nación**, representadas en este caso por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Valle, como reparación del daño antijurídico ocasionado, por la detención que sufriera su hermano el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, a pagar a su hermano **LUIS ALFREDO IBARRA CASTAÑO**, en proporciones iguales, o a quien represente sus derechos por los perjuicios extrapatrimoniales o inmateriales actuales y futuros, los cuales se estiman en cuantía superior a los **TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. (\$22.552.250.00=M/C.)**, para un total de **VEINTIDOS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS CINCUENTA PESOS (\$22.552.250.00=M/C.)**, o la mayor suma que resulte probada dentro del proceso, actualizada al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A.

Sexta. La condena respectiva será indexada, actualizada de conformidad con lo previsto en el art. 187 inciso final del C.P.A.C.A (Ley 1437 de 2011), aplicando en la liquidación la variación promedio mensual del índice de precios al consumidor, desde la fecha de ocurrencia de los hechos hasta la de ejecutoria del correspondiente fallo definitivo

PRIMERA
LLE
LO

y su pago efectivo por la entidad condenada y de conformidad con las formulas que para el efecto ha establecido o establezca el Honorable Consejo de Estado.

Septima. A la sentencia que ponga fin al presente proceso se le dará cumplimiento en los términos del artículo 187 inciso final del C.P.A.C.A. (Ley 1437 de 2011) Las condenas devengaran intereses moratorios hasta que se verifique el pago total y efectivo conforme a los art. 192 y 195 de la Ley 1437 de 2011.

Octava. Se condene en costas, agencias en derecho a las partes demandadas conforme al art. 188 de la Ley 1437 de 2011.

HECHOS

1.- El señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, se identifica con la C.C No. 9.734.136 de Armenia – Quindío, hombre de 35 años de edad, quien convive en Unión libre con la señora **LUZ ESTELLA FERNANDEZ CORRALES**, y el mismo se hace responsable del menor **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNANDEZ** a quien reconoce como su hijastro, es decir, miembro de su círculo familiar.

2.- **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, fue capturado, imputado, encarcelado y finalmente absuelto de todos los cargos por la justicia penal; por tales hechos mi poderdante sufrió psicológicamente y fue rechazado socialmente, por encontrarse privado injustamente de la libertad, por Conducta Punible que nunca cometió y la cual, por su puesto es muy reprochable por la sociedad, como lo es el delito de Concusión (Art. 404 del C.P.), privación injusta de la libertad que sucedió en hechos que se relatan a continuación.

3.- Para el día treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) el señor **ERNESTO GARCIA CARDONA**, realiza denuncia ante la Fiscalía General de la Nación, la cual dice:

"...SOY EL DUEÑO DE UNA MOTOCICLETA MARCA YAMAHA CRYPTON 110 COLOR AZUL Y NEGRO DE PLACA FZL-89ª. EL DÍA DE HOY A ESO DE LAS 11:30 DE LA MAÑANA YO LE PRESTÉ LA MOTO A UN AMIGO DE NOMBRE ANDRÉS FELIPE HERRERA, PARA QUE ÉL SE TRASLADARA DESDE MI CASA LA CUAL ESTÁ UBICADA EN LA CARRERA 22 13 A 16 DEL BARRIO JARDÍN DE ESTE MUNICIPIO HASTA LA CARRERA 30 DONDE SE ENCUENTRAN LOS ALMACENES DE REPUESTOS CON EL FIN DE QUE ME CONSIGUIERA UN RESORTE DE LA PATADA DE LA OTRA MOTO A LOS 20 MINUTOS MÁS O MENOS DE **ANDRÉS FELIPE** HABER SALIDO, VOLVIÓ DICIÉNDOME QUE LA POLICÍA MOTORIZADA LE HABÍA QUITADO LA MOTO PORQUE ESTA NO TENÍA ESPEJOS, QUE ÉL LES HABÍA DICHO QUE CUADRABAN ESO PERO QUE LOS POLICÍAS LE HABÍAN MANIFESTADO QUE SE DIRIGIERA HASTA LAS INSTALACIONES DEL TRÁNSITO MUNICIPAL Y PREGUNTARA POR EL GUARDA DE TRÁNSITO RINCÓN Y QUE LE PAGARA A ÉL (QUE CON ÉL CUADRABA EL PRECIO) Y QUE POR ESO LOS POLICÍAS NO LE HICIERON EL COMPARENDO, YO ENTONCES DE IRME PARA TRÁNSITO, COGÍ UN DINERO Y LE TOME FOTOGRAFÍA A SUS NÚMEROS DE SERIE Y TAMBIÉN ESOS NÚMEROS DE SERIE LOS ESCRIBÍ EN UNA HOJA; EL DINERO TOTAL SON SETENTA MIL PESOS (\$70.000) DISCRIMINADOS EN DOS (02) BILLETES DE VEINTE MIL PESOS LOS CUALES TIENEN LAS SERIES 52310533 Y 62473818. UN (01) BILLETES DE DIEZ MIL PESOS (\$10.000) EL CUAL TIENE EL NÚMERO DE SERIE 97729845 Y CUATRO (04) BILLETES DE CINCO MIL PESOS (\$5.000) LOS CUALES TIENEN LOS NÚMEROS DE SERIE 16280796, 41035996, 46546305 Y 67214427; CUANDO LLEGUE A LAS INSTALACIONES DE TRÁNSITO, PREGUNTÉ POR EL GUARDA RINCÓN DONDE EL ENCARGADO DE LA GRÚA ME MANIFESTÓ QUE ESTE NO SE ENCONTRABA PERO QUE LA ENTREGA DE LA MOTO LA PODÍA CUADRAR CON EL GUARDA

PRIMERA
M-VALLE
EL CIRCULO



LONDOÑO, YA EL GUARDA LONDOÑO ME ATENDIÓ Y ME DIJO QUE PARA SACAR LA MOTO DE LOS PATIOS SIN HACERME NINGÚN COMPARENDO LE DIERA OCHENTA MIL PESITOS (\$80.000), YO LE DIJE QUE HABÍA LLEVADO SETENTA MIL PESOS (\$70.000), PERO EL ME DICE QUE LE CONSIGA LOS OCHENTA MIL PESOS, (\$80.000), QUE NO FUERA DURITO, PORQUE DE LO CONTRARIO ME HACÍA EL COMPARENDO POR LOS ESPEJOS; YO LE DIJE QUE COMO ME IBA HACER ESE COMPARENDO SI ESO LO DEBERÍAN HABER HECHO EN EL SITIO DONDE DETUVIERON LA MOTO PERO EL ME MANIFIESTA "PAPI, ESO NO DA PARTE, CONSÍGAME LOS OCHENTA MIL PESOS Y YO SE LA ENTREGO YA". YO LE MANIFESTÉ QUE TENÍA HASTA SETENTA Y SEIS MIL PESOS (\$76.000) ENTONCES EL ME DICE QUE SAQUE FOTOCOPIA DE LA CEDULA DE ANDRÉS (EL AMIGO MÍO QUE LLEVABA LA MOTO CUANDO SE LA INMOVILIZARON) COPIA DE LA TARJETA DE PROPIEDAD DE LA MOTO Y QUE LO ESPERARA AFUERA DEL TRÁNSITO PORQUE LA DOCTORA (NO SE CUAL DOCTORA) ESTABA AHÍ EN LAS OFICINAS. YO TENÍA UNA TARJETA DONDE ESTÁ EL NÚMERO TELEFÓNICO DEL TENIENTE HERRERA DE LA SIJIN ENTONCES APROVECHÉ QUE SALÍ Y LE MARQUÉ Y LE COMENTÉ LO QUE ME ESTABA PASANDO, ÉL ME DIJO QUE YA ENVIABA UN PERSONAL PARA QUE ESTUVIERA AL FRENTE DE ESA SITUACIÓN; PASADOS UNOS CINCO MINUTOS, EL GUARDA LONDOÑO SALIÓ DE LAS OFICINAS Y ME DIJO QUE LO ESPERARA MÁS ADELANTE PARA QUE LE ENTREGARA LOS DOCUMENTOS DE LA MOTO Y QUE METIERA EL DINERO POR DENTRO DE ESTOS DOCUMENTOS; ESO FUE LO QUE HICE, LE ENTREGUÉ LOS DOCUMENTOS DE LA MOTO EN UN PORTA DOCUMENTOS DE COLOR NEGRO QUE DICE PREVIMOTO EL CUAL ME DIERON CUANDO SAQUÉ LA TÉCNICO MECÁNICA Y DENTRO DE ESTE; EL DINERO QUE LONDOÑO ME HABÍA PEDIDO, ÉL LOS TOMÓ Y ME DIJO QUE LO ESPERARA QUE YA ME SACABA LA MOTO, EN ESE MOMENTO LLEGA UN TAXI CON UNOS POLICÍAS DE LA SIJIN Y AL PRIMERO QUE SE BAJÓ YO LE SEÑALÉ AL GUARDA QUE ME HABÍA RECIBIDO EL DINERO Y LE DIJE QUE ESTE LLEVABA UN PORTA DOCUMENTOS Y DENTRO DE ESTE EL DINERO; ESE POLICÍA LE GRITÓ QUE SE DETUVIERA, LE GRITÓ "POLICÍA JUDICIAL" Y DETRÁS DE ESTE POLICÍA SE BAJARON OTROS POLICÍAS DEL TAXI Y EN ESE MOMENTO EL GUARDA LONDOÑO DE TRÁNSITO SALE A CORRER HACIA LA PARTE INTERNA DE LOS INSTALACIONES LLEVANDO EN SUS MANOS EL PORTA DOCUMENTOS CON EL DINERO. LOS POLICÍAS DE LA SIJIN ENTRAN CORRIENDO DETRÁS DE EL Y AL MOMENTO SALEN CON LONDOÑO ESPOSADO... (Negrilla y subrayado establecido por la suscrita)

4.- Para el día treinta y uno (31) de mayo de dos mil tres (2013); ante el Juez Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Tuluá (V), Audiencias Preliminares de Legalización de Captura, Imputación, y Medida de Aseguramiento, en las cuales el juez de control de garantías decide:

"...Por el juzgado se imparte legalidad a la captura en flagrancia e incautación de evidencias..."

"...Se imparte legalidad a la formulación de imputación..."

"...Escuchadas las argumentaciones de la Fiscalía, así como las del Defensor, el Despacho impone medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario al señor OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO..."

5.- De igual manera el Treinta y Uno (31) de mayo de dos mil trece (2013) se expide **ORDEN DE ENCARCELACIÓN No. 096** por parte del Juez Segundo Penal Municipal de Tuluá (V) en contra del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**.

6.- La Fiscal Treinta y dos Seccional suscribe *Escrito de Acusación* el día veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013). En donde narran los hechos de la captura así:

"...Se cuenta con informe ejecutivo, en el cual se da a conocer que el día 30 de mayo de 2013 aproximadamente a las 15:15 horas, la patrulla conformada por los patrulleros JHONY ALEXANDER OSORIO RENDON, JORGE CORREA GUTIERREZ Y JAWER SMITH CHANCON CARRILO, bajo la coordinación del Intendente JOSE SILVIO MUÑOZ VALLEJO, miembros adscritos a la unidad de investigativa de la Policía Nacional Grupo SIJIN, de Tuluá Valle, fueron direccionados por su superior Subintendente EDWUIN REYNEL HERRERA MORA, para





desplazarse hasta las instalaciones de Tránsito Municipal de Tuluá Valle, conociéndose de una denuncia de un ciudadano que presuntamente le estaban exigiendo dinero en esa dependencia para hacerle entrega de una motocicleta que momentos previos había sido inmovilizada por no contar con sus respectivos espejos reglamentarios, por lo cual procedieron a desplazarse hasta el lugar en un vehículo tipo Taxi de Placas SHI-090, y al llegar a los a la entrada a los patios de esa entidad, una persona de sexo masculino, que vestía camiseta color blanco y gorra clara, los abordó manifestándoles que era la persona que había realizado la llamada al Teniente Herrera y que le había entregado un porta documentos con setenta y seis mil pesos (\$76.000,00), junto con los documentos de la Motocicleta de Placas FZL-89 A, al guarda de tránsito de apellido LONDOÑO, señalándolo mientras éste caminaba en dirección a las oficinas de Tránsito, por lo que de inmediato se le gritó en voz alta a la persona señalada "Alto Policía Judicial" pero el guarda al escuchar el llamado de alto, sale a correr hacia las instalaciones internas de las Oficinas de Tránsito, siendo seguido a escasos (2) metros por el PT. JOGE CORREA GUTIERREZ, quien observa cuando éste en su recorrido saca del interior de un bolso tipo canguro que portaba al cinto, lado izquierdo, un porta - documentos color negro el cual arroja al interior de la oficina a la que ingresa, sobre un escritorio; al revisar el elemento arrojado se verifica que se trataba de un porta-documentos que en su interior contenía los documentos referidos por el señor ERNESTO GARCIA y varios billetes que sumaban un valor de setenta y seis mil pesos (\$76.000,00), correspondientes a los números seriales que indicó la víctima había escrito en un documento con su puño y letra, previo a la entrega al funcionario de tránsito que le exigía el pago para entregarle su motocicleta; situación ante la cual se le dieron a conocer al guarda de Tránsito los derechos como persona capturada, quien dentro de los trámites de la judicialización logró identificar como OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO con C.C. 9.734.136 expedida en Armenia Quindío, persona que dentro del respectivo procedimiento se negó a prestar la colaboración requerida, negándose a firmar la documentación correspondiente..."

7.- El día diez (10) de agosto de dos mil trece (2013); se le concede salida del Establecimiento Carcelario de Tuluá (V) al señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, por Revocatoria de la Medida de Aseguramiento, según boleta de libertad No. 006 expedida por el Juez Tercero Penal del Circuito de Tuluá (V).

8.- La Fiscalía 32 Seccional de Tuluá, el día seis (6) de septiembre (9) de dos mil trece (2013), solicita la Preclusión de la acción penal en contra del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, por el delito de Concusión (Art. 404 del C.P.).

9.- Para el cinco (5) de marzo (3) de dos mil catorce (14) el Juez Tercero Penal de Circuito de la ciudad de Tuluá (V), realiza Audiencia de Preclusión, en la cual se **DECRETÓ LA PRECLUSIÓN DE LA ACCIÓN PENAL**, adelantada en contra del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**. Considerando y resolviendo de la siguiente manera:

"...Teniendo en cuenta las precedentes argumentaciones de la señora Fiscal y avaladas por la defensa, y tomando como base el juicio de razonabilidad y bajo los parámetros de la sana crítica, observa la judicatura que este caso se atempera en un todo a lo solicitado por aquellos, pues se nota que en realidad de verdad, en el caso de la especie no puede ser castigado el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** por el delito de concusión contemplado en el artículo 404 del Código Penal. Por el solo hecho o circunstancia de que medie una denuncia, como quedó claro, instaurada por el señor **ERNESTO GARCIA CARDONA**, donde en realidad atendiendo el despacho la exposición de la Fiscalía como el aval mismo de la defensa quedan situaciones o actuaciones no muy, no tan santas en cabeza de los gendarmes. En primer lugar, como para resaltar algunas más importantes y que fueron también referidas por la señora Fiscal... No tiene presentación de que funcionarios de la Policía Judicial, ellos más que nadie saben que ninguna actuación se puede hacer sino están previamente identificados. Cuando llegan a las actuaciones, verbigracia de allanamientos Lo primero que hacen es portar su respectiva cachucha que dice SIJIN y el respectivo uniforme y las placas que los identifican como funcionarios de la Policía, concretamente de la SIJIN.



En este caso llegar en un vehículo tipo taxi de servicio público, tampoco tiene presentación porque debieron de llegar en los vehículos oficiales y peor aún con la placa que no correspondía a ese taxi de servicio público, la placa No VMC004 que pertenece a una camioneta DIMAX CHEVROLETH-.

FUNDAMENTOS DE DERECHO DE LAS PRETENSIONES

DAÑO ANTIJURÍDICO COMO FUNDAMENTO DE LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO

La **Constitución Nacional prevé en el art. 90** que el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En este caso - la responsabilidad patrimonial del Estado, por **"Error Judicial"** permite ahora a mi poderdante, acudir ante la justicia contenciosa administrativa para que a través del Medio de Control Judicial y Demanda de Reparación Directa, reclame del Estado, el pago de las sumas de dinero que se le deberán liquidar a su favor, como indemnización de perjuicios por el proceso penal que debió soportar injustamente, a causa de la falla de la administración de justicia en cabeza de varios de sus funcionarios.

Como lo consagra el art. 140 de la ley 1437 de 2011: *"En los términos del art. 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado" (...), de acuerdo a lo anterior, para mi poderdante se constituye la existencia de una obligación a su favor, de origen extracontractual actualmente exigible de pagar una cantidad líquida de dinero como se desprende y prueba con los documentos anexos.*

El art. 9 No 5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, apunta a que debe haber reparación en caso de encarcelación ilegal como lo es el caso. Igualmente el No 6. Del art. 14 del mismo Pacto Internacional, indica: ***"... Cuando una sentencia condenatoria en firme haya sido ulteriormente revocada, o el condenado haya sido indultado por haberse producido o descubierto un hecho plenamente probatorio de la comisión de un error judicial, la persona que haya sufrido una pena como resultado de tal sentencia deberá ser indemnizada, conforme a la ley, a menos que se demuestre que le es imputable en todo o en parte el no haberse revelado oportunamente el hecho desconocido..."***

Uno de los fundamentos para aceptar la responsabilidad del estado por una deficiente administración de justicia es la Falla del Servicio Público, al igual que para las demás actuaciones del estado por las que debe responder; si se tiene en cuenta que sus obligaciones se basan fundamentalmente en la protección de la vida, honra y bienes de los



asociados, para asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales tanto del estado mismo como de los particulares, es apenas obvio que de mediar un incumplimiento para llevar estos fines a la realidad se derive como consecuencia la responsabilidad del ente, entendiendo que estos fines constituyen una obligación latente y no un mero enunciado filosófico. La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema ampliamente, y con fundamentos legales claros, tanto de la anterior Constitución, como de esta, ha llegado a la conclusión anotada. Ver Sentencias del Consejo de Estado:

SECCION TERCERA SUBSECCION A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012)
Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01402-01(22701) Actor: SECUNDINO MORA PATIÑO Y OTROS Demandado: NACION-RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12076 y Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15980. Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes números 13232 y 15646, Consejero Ponente doctor Alir Eduardo Hernández Enríquez.

*Expediente 85001 23 31 000 1999 0351 (23381) de 2011, 2012-02-08. NUEVAMENTE LA FISCALÍA RESPONDE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EN ESTE CASO DE UN CIUDADANO VINCULADO "IRREGULARMENTE" A INVESTIGACIÓN PENAL. Analizados los elementos de prueba aportados, la Sala encontró acreditado que la actuación de la Fiscalía constituyó el factor determinante para que la privación de la libertad del ciudadano resultara injusta, pues pese a las inconsistencias con la identidad del presunto autor del delito de estafa, la Fiscalía profirió orden de captura. **Modifica.** M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. **Documento Disponible al Público en marzo de 2012.** Temas: Principio Universal de Presunción de Inocencia. Prisión Arbitraria. Daño Antijurídico.*

Si bien es cierto que la falla del servicio como fundamento de responsabilidad estatal, no exige de parte del afectado la identificación particular del agente que causó el perjuicio, pero cuando se alega no se presume ni la responsabilidad ni la culpa lo que obliga a probar que el servicio no funcionó de manera adecuada, funcionó tardíamente o simplemente no funcionó, y además que ese hecho causó un daño y que entre estos dos elementos existió relación de causalidad. Cuando se fundamenta la responsabilidad del Estado en la Falla del Servicio desaparece el problema de la culpa personal del funcionario y de esta manera se abre paso a una culpa anónima en la prestación del servicio.

La Responsabilidad Patrimonial del Estado por falla en la administración de justicia, según lo previó el art. 65 y 68 de la Ley 270 de 1996 estatutaria de la administración de justicia que reguló la responsabilidad del Estado y de sus funcionarios y empleados judiciales. Modificada por la ley estatutaria 1285 de 2009, en la que se establece, sobre la Responsabilidad Patrimonial del Estado que: *"El Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de sus agentes judiciales. En los términos del inciso anterior el Estado responderá por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad", "Privación injusta de la libertad: quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios".*

Los cuales en el caso que nos ocupa se configuran en su totalidad, como quiera que a mi representado se le privo injustamente de su libertad, a través de un errado proceso penal y por último se le concedió la libertad tras haber estado privado injustamente de la libertad, por espacio de CIENTO TREINTA Y UN DIAS (131) días equivalentes aproximadamente a CUATRO (4) MESES y ONCE (11) DIAS, tiempo durante el cual se adelantó el proceso penal en su contra, terminando con la preclusión de la investigación, a su favor, por lo tanto, consideramos que a consecuencia de lo anterior el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, en calidad de procesado por la justicia penal y absuelto de todos los cargos, la señora **LUZ ESTELLA FERNANDEZ CORRALES** en calidad de compañera permanente del primero y en representación legal del menor **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNÁNDEZ** en calidad de hijastro del primero; **CARLOS LONDOÑO MARULANDA** y **MARÍA OFELIA CASTAÑO VILLA** en calidad de padres del primero y en representación legal de la menor **KISSENA LONDOÑO CASTAÑO** en calidad de hermana del primero, tendrán derecho a obtener la consiguiente reparación.

La obligación emerge directamente del nexo causal que existe entre la falla de la administración de justicia, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad que sin lugar a dudas no solo obligó a mi representado a soportar una carga que no estaba en la obligación de soportar sino que lo sometió a una prolongada y angustiosa espera, le vulneró su derecho al buen nombre, a la honra y a la dignidad.

De lo anterior surge la obligación económica de la Nación a través de los representantes de la Rama Judicial, y de la Fiscalía General de la Nación de indemnizar los perjuicios causados y reparar el daño producido por la conducta de sus funcionarios en la persona del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**.

Tenemos, además de la falla del servicio y como fundamento a la responsabilidad del Estado por error judicial, el daño considerado en sí mismo, pues la administración debe actuar conforme a derecho y si en alguna oportunidad causa un daño (inclusive en lo referente a la justicia) que el ciudadano no está obligado a soportar, el Estado debe indemnizar, para asegurar de esta manera que tanto los derechos fundamentales como los demás derechos de las personas, deben ser respetados y en caso de no serlo ellos deben obtener un resarcimiento. Con base en esta proposición se tiende a la responsabilidad objetiva ya que la idea de culpa se convierte, en el fondo, en un criterio de imputación que traspasa los efectos del perjuicio del patrimonio de la víctima al de la administración. El objeto de la reparación del daño no se basa en la sanción de una ilegalidad o en el instituto de la culpa personal, sino en resarcir el perjuicio con el fin de cumplir con el objetivo de mantener a los administrados en situación de igualdad ante las cargas públicas que deben soportar, por lo cual la teoría de la responsabilidad se convierte en un sistema de garantías para los ciudadanos.

Para la fecha en la cual el demandante sufrió la privación de la libertad, el día 30 de mayo de 2013, las fuentes normativas relacionadas con la responsabilidad patrimonial del Estado por falla del servicio judicial lo eran la Constitución de 1991, que estableció la responsabilidad patrimonial del Estado por "*los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o la omisión de las autoridades públicas*" y el decreto 2700 de ese mismo año -Código de Procedimiento Penal- que reguló dos supuestos de responsabilidad patrimonial del Estado por privación injusta de la libertad: a) El derecho a la reparación de perjuicios derivados del error judicial como consecuencia de la decisión que exonera de responsabilidad penal en el proceso de revisión (art. 242) y **b) El derecho a la indemnización por detención preventiva cuando se dicta sentencia absolutoria** o su equivalente en la que se concluya que el hecho no existió, el sindicado no cometió el delito o la conducta no constituía hecho punible (art. 414) **Y LA LEY 270 DE 1996, estatutaria que específicamente reguló este tema de responsabilidad y que es aplicable en la situación del señor OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO, (subrayas fuera de texto).**

La posición actual del Honorable Consejo de Estado¹, acerca de la responsabilidad Extracontractual del Estado por la privación injusta de la libertad teniendo en cuenta la aplicación del Art. 414 del Decreto 2700 de 1991 y de la Ley 270 de 1996, es la siguiente:

"2.4.- Sobre la responsabilidad extracontractual del Estado derivada de la privación de la libertad a la cual es sometido el sindicado en cuyo favor, posteriormente, se profiere sentencia absolutoria o pronunciamiento judicial equivalente a ella.

2.4.1.- Responsabilidad del Estado por la privación de la libertad de las personas al amparo de la vigencia del artículo 414 del derogado Código de Procedimiento Penal.

La Sala, en relación con la responsabilidad del Estado derivada de la privación de la libertad de las personas, dispuesta como medida de aseguramiento dentro de un proceso penal, no ha sostenido un criterio uniforme cuando se ha ocupado de interpretar y aplicar el artículo 414 del Código de Procedimiento Penal². En efecto, la jurisprudencia se ha desarrollado en cuatro distintas direcciones, como en anteriores oportunidades se ha sido puesto de presente³...

... Finalmente y en un cuarto momento, la Sala amplió la posibilidad de que se pueda declarar la responsabilidad del Estado por el hecho de la detención preventiva de ciudadanos ordenada por autoridad competente a aquellos eventos en los cuales se causa al individuo un daño antijurídico aunque el mismo se derive de la aplicación dentro del proceso penal respectivo del principio in dubio pro reo, de manera tal que no obstante haberse producido la privación de la libertad como resultado de la actividad investigativa correctamente adelantada por la autoridad competente e incluso habiendo sido proferida la medida de aseguramiento con el lleno de las

¹ Sentencia del veinticinco (25) de febrero de dos mil nueve (2009) de la Sala de Lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, M.P. Dr. Mauricio Fajardo Gómez, demandante: Edgar Antonio Borja Silva y otros, Expediente: 250002326000199815851 01, Radicado: 25.508. Actualmente sigue conforme a derecho esta posición jurisprudencial.

² El tenor literal del precepto en cuestión es el siguiente: "Artículo 414. Indemnización por privación injusta de la libertad. Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado indemnización de perjuicios. Quien haya sido exonerado por sentencia absolutoria definitiva o su equivalente porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, o la conducta no constituía hecho punible, tendrá derecho a ser indemnizado por la detención preventiva que le hubiere sido impuesta siempre que no haya causado la misma por dolo o culpa grave".

³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 4 de diciembre de 2006, expediente: 13.168; Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia del 2 de mayo de 2007, expediente No. 15.463.



exigencias legales el imputado no llega a ser condenado porque la investigación es dudosa e insuficiente para condenar el imputado, circunstancia que hace procedente el reconocimiento de la obligación, a cargo del Estado de indemnizar los perjuicios irrogados al particular, siempre que éste no se encuentre en el deber jurídico de soportarlos –cosa que puede ocurrir, por vía de ejemplo, cuando el hecho exclusivo y determinante de la víctima da lugar a que se profiera, en su contra, la medida de aseguramiento⁴.

Las decisiones que han establecido que el Estado debe responder cuando se configure alguna de las causales del artículo 414 del C. de P. C., sin que sea necesario cuestionar la conducta del funcionario que impuso la respectiva medida de aseguramiento de privación de la libertad, incluso en los casos en que se ha absuelto al detenido por in dubio pro reo –todo bajo un régimen objetivo de responsabilidad– han estado fundamentadas en la primacía del derecho fundamental a la libertad, la cual debe ser garantizada en un Estado Social de Derecho como lo es el Estado Colombiano por virtud de lo dispuesto en la Constitución Política...

... Así las cosas, se tiene que el ordenamiento jurídico colombiano, orientado por la defensa de los derechos fundamentales de los ciudadanos, no puede escatimar esfuerzos en aras de garantizar la protección de dicho derecho, por tanto no se puede entender que los administrados estén obligados a soportar como una carga pública la privación de la libertad y que, en consecuencia, estén obligados a aceptar como un beneficio o una suerte que posteriormente la medida sea revocada. No, en los eventos en que ello ocurra y se configuren las causales previstas en el citado artículo 414 del C. de P. C., o incluso cuando se absuelva al detenido por in dubio pro reo –sin que opere como eximente de responsabilidad la culpa de la víctima– el Estado está llamado a indemnizar los perjuicios que hubiere causado por razón de la imposición de una medida de detención preventiva que lo privó del ejercicio del derecho fundamental a la libertad, pues esa es una carga que ningún ciudadano está obligado a soportar por el sólo hecho de vivir en sociedad.

2.4.2. El régimen jurídico aplicable a la responsabilidad del Estado por el hecho de la privación de la libertad ordenada por autoridad competente, tras la entrada en vigencia de la Ley 270 de 1.996.

El presente proceso ofrece la particularidad de que durante el lapso en el cual tuvo lugar la privación de la libertad de los señores Edgar Borja, Ismael Cruz, Juan Carlos Hidalgo y José Robinson Silva ocurrió un tránsito de legislación en cuanto tiene que ver con la regulación que, a nivel de derecho positivo, se efectúa de la responsabilidad del Estado derivada de la detención preventiva ordenada dentro de una investigación penal.

Es así como la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la Administración de Justicia –la cual entró en vigencia el 15 de marzo del citado año–, norma que regía cuando los señores antes mencionados fueron dejados en libertad, contiene unas disposiciones relacionadas con el tema que vendrían, en principio, a sustituir la regulación del mismo efectuada por el antes aludido artículo 414 del Decreto Ley 2700 de 1991, norma que se encontraba vigente al momento en que los señores antes citados fueron privados de la libertad...

... Tal es la interpretación a la que conducen no sólo las incuestionables superioridad y preeminencia que le corresponden al citado canon constitucional, sino también una hermenéutica armónica y sistemática de los comentados preceptos de la misma Ley 270 de 1996, así como de los razonamientos plasmados por la propia Corte Constitucional en la sentencia C-037 de 1997, mediante la cual los encontró ajustados a la Carta Fundamental. En consecuencia, los demás supuestos en los cuales el juez de lo contencioso administrativo ha encontrado que la privación de la libertad ordenada por autoridad competente ha conducido a la producción de daños antijurídicos, con arraigo directamente en el artículo 90 de la Carta, tienen igualmente asidero tanto en la regulación que de este ámbito de la responsabilidad estatal efectúa la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia, como en la jurisprudencia de la Corte Constitucional relacionada con este asunto. De manera que aquellas hipótesis en las cuales la evolución de la jurisprudencia del Consejo de Estado –a la que se hizo referencia en apartado precedente– ha determinado que concurren las exigencias del artículo 90 de la Constitución para declarar la responsabilidad estatal por el hecho de la Administración de Justicia al proferir medidas de aseguramiento privativas de la libertad, mantienen su aplicabilidad tras la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996.

⁴ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del dos (2) de mayo de dos mil siete (2.007); Radicación No.:20001-23-31-000-3423-01; Expediente No. 15.463; Actor: Adíela Molina Torres y otros; Demandado: Nación– Rama Judicial.

En definitiva, no resultan compatibles con el artículo 90 de la Constitución, interpretaciones de normas infra constitucionales que restrinjan la cláusula general de responsabilidad que aquél contiene. Partiendo de la conclusión anterior, la Sala determinó que en el artículo 90 de la Constitución Política tienen arraigo, aún después de la entrada en vigor de la Ley 270 de 1996, todos los supuestos en los cuales se produce un daño antijurídico imputable a la Administración de Justicia que no están contemplados –más no por ello excluidos, se insiste en el pre-mencionado artículo 68 de la Ley Estatutaria de la Administración de Justicia–, entre ellos, como en los eventos en los cuales se impone a un ciudadano una medida de detención preventiva como consecuencia de la cual se le priva del ejercicio del derecho fundamental a la libertad pero posteriormente se le revoca tal medida al concluir que los aspectos fácticos por los cuales el investigado fue detenido no constituyeron hecho delictuoso alguno, supuesto que estaba previsto en el artículo 414 del C. de P. P., y que compromete la responsabilidad de la Administración, pues con su actuación causó un daño antijurídico consistente en la privación de la libertad en contra de quien no cometió el hecho delictuoso imputado, circunstancia que torna injusta la medida y que debe ser reparada por la autoridad que produjo el hecho.

En este sentido, la Sala, en sentencia del 26 de marzo de 2008⁵, precisó:

"3. Visto lo anterior, debe tenerse en cuenta que la privación de la libertad que se discute en este proceso, ocurrió entre el primero de octubre de 1996 y el 30 de octubre de 1997, cuando había entrado a regir la ley 270 de 1996, estatutaria de la administración de justicia, promulgada el 15 de marzo de 1997, y en cuyo artículo 68 se establece: "Quien haya sido privado injustamente de la libertad podrá demandar al Estado reparación de perjuicios"...

"Respecto del mismo artículo, la Sala ha considerado que su interpretación no se agota en la posibilidad de declarar la responsabilidad del Estado por detención injusta, cuando ésta sea ilegal o arbitraria. **EN JURISPRUDENCIA RECIENTE⁶, SE HA DETERMINADO QUE LAS HIPÓTESIS DE RESPONSABILIDAD OBJETIVA, TAMBIÉN POR DETENCIÓN INJUSTA, CONTEMPLADAS EN EL DEROGADO ARTÍCULO 414 DEL DECRETO 2700 DE 1991, MANTIENEN VIGENCIA PARA RESOLVER, DE LA MISMA FORMA, LA RESPONSABILIDAD DEL ESTADO DERIVADA DE PRIVACIONES DE LA LIBERTAD EN LAS CUALES SE HAYA ARRIBADO A CUALQUIERA DE LOS TRES SUPUESTOS A LOS QUE HACÍA REFERENCIA LA CITADA DISPOSICIÓN. ES DECIR, QUE DESPUÉS DE LA ENTRADA EN VIGENCIA DE LA LEY 270 DE 1996, CUANDO UNA PERSONA PRIVADA DE LA LIBERTAD SEA ABSUELTA "PORQUE EL HECHO NO EXISTIÓ, EL SINDICADO NO LO COMETIÓ, O LA CONDUCTA NO CONSTITUÍA HECHO PUNIBLE", SE CONFIGURA UN EVENTO DE DETENCIÓN INJUSTA. A LAS HIPÓTESIS CITADAS SE LES HA AGREGADO EL EVENTO DE ABSOLUCIÓN EN APLICACIÓN DEL IN DUBIO PRO REO. (Subrayado fuera de texto.)**

"De acuerdo con los principios tutelares del Estado Social y Democrático de Derecho, entre los cuales la libertad y la justicia ocupan un lugar privilegiado, frente a la materialización de cualquiera de las hipótesis enunciadas, cuando una persona privada de la libertad sea absuelta, porque el hecho no existió, el sindicado no lo cometió, la conducta no constituía hecho punible o por in dubio pro reo, se habrá de calificar sin ambages como detención injusta. Es por ello, que se trata de una responsabilidad objetiva, dado que en eventos de esta naturaleza, ambos valores se encuentran en juego y un argumento de tipo utilitarista, en el sentido de afirmar que se trata de una carga que se debe soportar en bien de la mayoría, no tiene justificación alguna⁷.

⁵ Sentencia del 26 de marzo de 2008, expediente 16.902. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero.

⁶ Sección Tercera, sentencia del dos de mayo de 2007, expediente: 15.463

⁷ Ver también sentencia proferida por la Sala el 23 de abril de 2008, expediente 17.534. M.P.: Dr. Enrique Gil Botero, en la cual se concluyó:

"i) Las hipótesis establecidas en el artículo 414 del C.P.P. de 1991 (decreto ley 2700) mantienen vigencia para resolver, de manera objetiva, la responsabilidad del Estado derivada de privaciones injustas de la libertad, en las cuales se haya arribado a cualquiera de las conclusiones a las que hace referencia la citada disposición, inclusive, con posterioridad a la ley 270 de 1996, en los términos precisados por la jurisprudencia de la Corporación ...

"v) En conclusión, cuando se atribuye la responsabilidad del Estado por privación injusta de la libertad, existen eventos precisos y específicos en los cuales la jurisprudencia –con fundamento en el principio iuranovit curia, ha aceptado la definición de la controversia a través de la aplicación de títulos de imputación de carácter objetivo, en los cuales, la conducta asumida por la administración pública no juega un papel determinante

Partiendo de los principios de legalidad, buena fe, primacía de la realidad, la presunción de inocencia, el in dubio pro reo, y que en el caso en cuestión para mi poderdante está **CLARAMENTE PROBADO DENTRO DEL PROCESO PENAL QUE NO COMETIÓ LA CONDUCTA PUNIBLE ENROSTRADA POR LA FISCALIA** y teniendo en cuenta la interpretación de los postulados jurisprudenciales transcritos se evidencia que el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** al haber sido **injustamente privado de la libertad** tiene derecho a obtener sin duda alguna, **la reparación de los daños que la misma le ha causado**, reparación que se deriva en la **antijuridicidad del daño**, que le es imputable al Estado, en los términos del artículo 90 de la Carta Política, toda vez, que esta norma sin excepción alguna comprende las actuaciones de todas las autoridades del Estado, y por ende de La Nación – Rama Judicial y la Fiscalía General de la Nación.

En efecto en el auto interlocutorio de primera instancia No. 062 proferido el (05) de marzo de 2014, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá-Valle, mediante la cual Resolvió la preclusión de acción penal en contra del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, **se consideró que éste no efectuó los comportamientos que se le endilgaron a mi patrocinado**, en consecuencia ordeno librar orden de excarcelación en favor del hoy demandante, toda vez que no se reunieron los presupuestos que exige la ley para proferir un fallo adverso **EN VISTA DE QUE NO EXISTIÓ MEDIO DE PRUEBA QUE COMPROMETIERA PENALMENTE LA RESPONSABILIDAD DE MI PODERDANTE EN LOS HECHOS MATERIA DE INVESTIGACIÓN, POR EL CONTRARIO COMO LO DIO A ENTENDER EL PROPIO JUZGADO, LAS PRUEBAS OBRANTES EN EL PROCESO ACREDITABAN FEHACIENTEMENTE QUE EL SEÑOR OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO, NO HABÍA COMETIDO LA CONDUCTA POR LA CUAL SE LE HABÍA DETENIDO INJUSTA E ILEGÍTIMAMENTE.**

De conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política, el Estado responderá patrimonialmente por los daños antijurídicos causados por la acción u omisión de las autoridades públicas, que le sean imputables. En consecuencia, es necesario dilucidar en cada caso concreto si se configuran los elementos previstos en esta norma para que nazca el deber del Estado de responder, esto es, el daño antijurídico y la imputabilidad del mismo al demandado.

LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACION-, representada en este caso por el señor Fiscal General de la Nación o por su delegado para los asuntos

para la atribución del resultado. Por el contrario, las demás situaciones que desborden ese específico marco conceptual, deberán ser definidas y desatadas a partir de la verificación de una falla del servicio en cabeza del aparato estatal”.

judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Cali, o por quien los reemplace o haga sus veces, con el actuar de uno de sus funcionarios, incurrió en responsabilidad por lo que debe responder patrimonialmente al serle imputable el daño antijurídico que el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, no estaba en el deber jurídico de soportar, de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, artículo 140 del Código Contencioso Administrativo (Ley 1437 de 2011), la ley 270 de 1996 y demás normas concordantes y aplicables.

La responsabilidad de **LA NACIÓN – RAMA JUDICIAL – FISCALIA GENERAL DE LA NACION**, en este caso, se manifiesta claramente toda vez que el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, permaneció privado de la libertad durante 131 días equivalentes aproximadamente a cuatro meses y once días, como consecuencia de la detención preventiva que se le impuso en el proceso penal que se adelantó en su contra por la presunta comisión del delito de Concusión, quedando en libertad gracias a la labor de su apoderado judicial, que mediante la figura del control de legalidad consiguió que el Juez Tercero Penal del Circuito de Tuluá Valle revocara la medida de aseguramiento impuesta al hoy demandante.

La motivación de la Resolución a través de la cual se precluyó la investigación en favor de mi representado, se fundamentó entre otras razones en que no existió prueba que permita pregonar con la certeza que demanda la ley, que el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, haya participado en la comisión de la conducta de que se le acusó por parte de la Fiscalía treinta y dos Seccional de Tuluá, y no porque haya habido duda al respecto, sino porque, no existía prueba suficiente en contra del procesado, por lo tanto, tiene derecho a que se le indemnice por los perjuicios materiales e inmateriales que le causó la privación injusta de la libertad a la que fue sometido, cuando la regla general del Derecho Penal, es la Libertad, y no la privación de la misma que es la excepción extrema a dicha regla.

En consecuencia, está probado que el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, sufrió un daño antijurídico (*calificación que se obtiene de constatar que el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carezca de "causales de justificación"*), imputable a La Nación –Fiscalía General de la Nación, que da lugar a la reparación de los perjuicios materiales y extra patrimoniales que sufrió y los perjuicios extra patrimoniales, que conjuntamente sufrió también su compañera permanente **LUZ ESTELLA FERNÁNDEZ CORRALES** en nombre propio y también en representación legal de sus menor hijo **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNÁNDEZ** (Hijastro del afectado), sus padres **CARLOS LONDOÑO MARULANDA y MARÍA OFELIA CASTAÑO VILLA** en nombre propio y en representación legal de la menor **KISSENA LONDOÑO CASTAÑO** (Hermana del afectado) y su hermano **LUIS ALFREDO IBARRA CASTAÑO** por la detención injusta e ilegítima que sufriera el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**.

IMERA
LE
ULO

Como ya se dijo, el Estado debe responder patrimonialmente por los daños antijurídicos que le sean imputables, causados por la acción o por la omisión de las autoridades públicas. En este caso - la responsabilidad patrimonial del Estado, por "Error Judicial" permite ahora a mi poderdante, acudir ante la justicia contenciosa administrativa para que a través del Medio de Control y pretensión de Reparación Directa, reclame del Estado, el pago de las sumas de dinero que se le deberán liquidar a su favor, como indemnización de perjuicios por el proceso penal que debió soportar injustamente, a causa de la falla de la administración de justicia en cabeza de varios de sus funcionarios.

Como lo consagra el C.C.A. en su art. 140 de la Ley 1437 de 2011 que a la letra dice:

"...En los términos del artículo 90 de la Constitución Política, la persona interesada podrá demandar directamente la reparación del daño antijurídico producido por la acción u omisión de los agentes del Estado.

De conformidad con el inciso anterior, el Estado responderá, entre otras, cuando la causa del daño sea un hecho, una omisión, una operación administrativa o la ocupación temporal o permanente de inmueble por causa de trabajos públicos o por cualquiera otra causa imputable a una entidad pública o a un particular que haya obrado siguiendo una expresa instrucción de la misma.

Nota Jurisprudencial

Corte Constitucional
<i>Aparte subrayado declarado EXEQUIBLE, por los cargos demandados, por la Corte Constitucional mediante <u>Sentencia C-644-11</u> según Comunicado de Prensa de la Sala Plena de 31 de agosto de 2011, Magistrado Ponente Dr. Jorge Iván Palacio Palacio.</i>

Las entidades públicas deberán promover la misma pretensión cuando resulten perjudicadas por la actuación de un particular o de otra entidad pública.

En todos los casos en los que en la causación del daño estén involucrados particulares y entidades públicas, en la sentencia se determinará la proporción por la cual debe responder cada una de ellas, teniendo en cuenta la influencia causal del hecho o la omisión en la ocurrencia del daño..."

AREA PRIMERA
TULUA-VALLE
DEL CIRCULO

Uno de los fundamentos para aceptar la responsabilidad del estado por una deficiente administración de justicia es la Falla del Servicio Público, al igual que para las demás actuaciones del Estado por las que debe responder; si se tiene en cuenta que sus obligaciones se basan fundamentalmente en la protección de la vida, honra y bienes de los asociados, para asegurar de esta forma el cumplimiento de los deberes sociales tanto del Estado mismo como de los particulares, es apenas obvio considerar, que de mediar un incumplimiento para llevar estos fines a la realidad se derive como consecuencia la responsabilidad del ente, entendiendo que estos fines constituyen una obligación latente y no un mero enunciado filosófico.

La jurisprudencia del Consejo de Estado y de la Corte Suprema de Justicia se ha ocupado del tema ampliamente, y con fundamentos legales claros tanto de la anterior Constitución, como de esta, ha llegado a la conclusión anotada. Ver Sentencias del Consejo de Estado:

SECCION TERCERA SUBSECCION A Consejero ponente: CARLOS ALBERTO ZAMBRANO BARRERA Bogotá, D.C., veintisiete (27) de enero de dos mil doce (2012) Radicación número: 73001-23-31-000-2000-01402-01(22701) Actor: SECUNDINO MORA PATIÑO Y OTROS Demandado: NACION- RAMA JUDICIAL-DIRECCION EJECUTIVA DE ADMINISTRACION JUDICIAL Y FISCALIA GENERAL DE LA NACION.

Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12076 y Sentencia de 20 de febrero de 2.008, exp. 15980. Sentencia de 6 de septiembre de 2001, expedientes números 13232 y 15646, Consejero Ponente doctor Alíer Eduardo Hernández Enríquez.

Expediente 85001 23 31 000 1999 0351 (23381) de 2011, 2012-02-08. NUEVAMENTE LA FISCALÍA RESPONDE POR PRIVACIÓN INJUSTA DE LA LIBERTAD, EN ESTE CASO DE UN CIUDADANO VINCULADO "IRREGULARMENTE" A INVESTIGACIÓN PENAL. Analizados los elementos de prueba aportados, la Sala encontró acreditado que la actuación de la Fiscalía constituyó el factor determinante para que la privación de la libertad del ciudadano resultara injusta, pues pese a las inconsistencias con la identidad del presunto autor del delito de estafa, la Fiscalía profirió orden de captura. Modifica. M. P. Carlos Alberto Zambrano Barrera. Documento Disponible al Público en Marzo de 2012. Temas: Principio Universal de Presunción de Inocencia. Prisión Arbitraria. Daño Antijurídico.

Si bien es cierto que la falla del servicio como fundamento de responsabilidad estatal, no exige de parte del afectado la identificación particular del agente que causó el perjuicio, pero cuando se alega no se presume ni la responsabilidad ni la culpa lo que obliga a probar que el servicio no funcionó de manera adecuada, funcionó tardíamente o simplemente no funcionó, y además que ese hecho causó un daño y que entre estos dos elementos existió relación de causalidad. Cuando se fundamenta la responsabilidad del Estado en la Falla del Servicio desaparece el problema de la culpa personal del funcionario y de esta manera se abre paso a una culpa anónima en la prestación del servicio, también es cierto que en el caso que nos ocupa se cometieron errores en contra del ciudadano **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, pues no solo se le juzgó y condenó por un delito que no cometió, sino que además se le sometió al escarnio público al enfrentar un proceso penal, que no estaba en la obligación de soportar.

La obligación emerge directamente del nexo causal que existe entre la falla de la administración de justicia, por el defectuoso funcionamiento de la administración de justicia, por el error jurisdiccional y por la privación injusta de la libertad que sin lugar a dudas no solo obligó a mi patrocinado a soportar una carga que no estaba en la obligación de soportar sino que al final de cuentas y tras una prolongada y angustiosa espera, sus derechos constitucionales al buen nombre, a la honra y a la dignidad se vieron afectados.

De lo anterior surge la obligación económica de la administración de justicia y de la Fiscalía General de la Nación de indemnizar los perjuicios causados y reparar el daño producido por la conducta de sus funcionarios en la persona del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**.

Si el Estado es una unidad y todos sus órganos actúan por él, el fundamento de la responsabilidad debe ser igual para todos, por ello no podemos ver el tema de la responsabilidad que le corresponde al estado por el error judicial de manera aislada. La

reparación en este caso se fundamenta simplemente en la justicia distributiva y si el estado comete un error por abuso, desvío o inacción cualquiera sea el órgano específicamente encargado de la función, debe responder por el no cumplimiento de sus obligaciones.

Tenemos, además de la falla del servicio y como fundamento a la responsabilidad del Estado por error judicial, el daño considerado en sí mismo, pues la administración

debe actuar conforme a derecho y si en alguna oportunidad causa un daño (inclusive en lo referente a la justicia) que el ciudadano no está obligado a soportar, el Estado debe indemnizar para asegurar de esta manera que tanto los derechos fundamentales como los demás derechos de las personas deben ser respetados y en caso de no serlo ellos deben obtener un resarcimiento. Con base en esta proposición se tiende a la responsabilidad objetiva ya que la idea de culpa se convierte, en el fondo, en un criterio de imputación que traspasa los efectos del perjuicio del patrimonio de la víctima al de la administración.

El objeto de la reparación del daño no se basa en la sanción de una ilegalidad o en el instituto de la culpa personal, si no en resarcir el perjuicio con el fin de cumplir con el objetivo de mantener a los administrados en situación de igualdad ante las cargas públicas que deben soportar, por lo cual la teoría de la responsabilidad se convierte en un sistema de garantías para los ciudadanos.

LAS PERSONAS EN EL PROCESO Y SUS REPRESENTANTES

Parte demandada: La Nación – Rama Judicial - La Nación Fiscalía General de la Nación representada en este caso por el Director Ejecutivo Administración Judicial y el señor Fiscal General de la Nación, respectivamente, o por su delegado para los asuntos judiciales ante lo Contencioso-Administrativo Seccional Cali-Valle, o por quien lo reemplace o haga sus veces.

De la presente deberá darse traslado a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, al señor Agente del Ministerio Público delegado ante este despacho judicial con quien ha de surtirse la tramitación del proceso por competencia.

Parte demandante: **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** identificado con C.C No. 9.734.136 de Armenia Quindío, **LUZ ESTELLA FERNÁNDEZ CORRALES** C.C No. 31.570.852 de Cali (V) en nombre propio y en representación legal del menor **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNÁNDEZ**, **CARLOS LONDOÑO MARULANDA** C.C No.12.455.198 de San Alberto Cesar y **MARÍA OFELIA CASTAÑO VILLA** C.C No. 42.498.545 de Valledupar Cesar en nombre propio y en representación legal de la menor **KISSENA LONDOÑO CASTAÑO** y **LUIS ALFREDO CASTAÑO IBARRA** C.C No. 1.094.884.264 de Armenia Quindío, quienes serán representados judicialmente por la suscrita como su apoderada judicial.



Apoderada de las Partes Demandantes: Dra. CLAUDIA LILIANA RESTREPO ESPINOSA, identificada con la C.C No. 29.873.663 de Tuluá – Valle, abogada en ejercicio con T.P No. 173.108 del C.S.J.

PRUEBAS

Ruego sean tenidas en cuenta las siguientes:

I. Documentales:

1. Copia Cédula de Ciudadanía del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**.
2. Copia Auténtica Registro Civil de Nacimiento del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**.
3. Declaración Bajo juramento para Fines Extraprocesales suscrita en la Notaría Tercera del Circuito de Tuluá.
4. Copia de Cédula de Ciudadanía de la señora **LUZ ESTELLA FERNANDEZ CORRALES**.
5. Copia Tarjeta de Identidad del menor **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNANDEZ**.
6. Copia Auténtica Registro Civil de Nacimiento del menor **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNANDEZ**.
7. Copia de Cédula de Ciudadanía del señor **LUIS ALFREDO IBARRA CASTAÑO**.
8. Copia Auténtica Registro Civil de Nacimiento del señor **LUIS ALFREDO IBARRA CASTAÑO**.
9. Copia Tarjeta de Identidad de la menor **KISSENA LONDOÑO CASTAÑO**.
10. Copia Auténtica Registro Civil de Nacimiento de la menor **KISSENA LONDOÑO CASTAÑO**.
11. Copia de Cédula de Ciudadanía del señor **CARLOS LONDOÑO MARULANDA**.
12. Copia de Cédula de Ciudadanía de la señora **MARIA OFELIA CASTAÑO VILLA**.
13. Copia Auténtica **ARCHIVO DEFINITIVO** proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Tuluá (V). La cual consta de 143 folios.
14. Copia Auténtica **Acta de Audiencia No. 081 de 2014 Decisión de Preclusión** proferida por el Juez Tercero Penal del Circuito de Tuluá (V).
15. Original Certificado de Libertad proferido por el Director Establecimiento Carcelario de Tuluá (V) Regional Occidente.
16. Copia magnética de la Audiencia de Preclusión precedida por el Juez Tercero Penal del Circuito de Tuluá.
17. Recibo Honorarios de abogado asunto penal.



II. Traslado de Pruebas:

Solicito con todo respeto a su despacho que de considerarlo necesario:

1. Se oficie al Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimientos de Tuluá (V), quien fue en ultimas el que emitió el decretó la Preclusión de la Acción Penal sobre **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, para que con destino a este proceso, remita copia autentica con constancia de ejecutoria de las siguientes providencias judiciales y/o documentos que aparecen evidenciados en dicho proceso o carpeta:
 - 1.1. Escrito de acusación proferido por la Fiscalía Treinta y Dos Seccional de Tuluá (V), en contra del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, con fecha del 26 de julio de 2013.
 - 1.2. Auto Interlocutorio de Primera Instancia No. 062 fechada el día cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014) en el acta No 081, proferido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito especializado de Tuluá (V), a través de la cual Resolvió: decreta la PRECLUSIÓN de la acción penal en contra del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, en la cual, además, quedó claramente establecido que como quiera que contra esta decisión no se interpuso recurso de apelación, se declara legalmente ejecutoriada la misma. Y las partes quedaron notificadas en estrados.
 - 1.3. La totalidad del expediente que conforma el proceso penal, radicado bajo el No. 2013-00091-00, seguido en contra del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, en el cual se profirio decisión el día cinco (5) de marzo de dos mil catorce (2014), a traves de la cual se decretó la PRECLUSIÓN de la acción penal en contra del señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**.
 - 1.4. Solicito se requiera al Director de la Cárcel de la ciudad de Tuluá (Valle) y/o quien haga sus veces, para que con destino a este proceso certifique de conformidad con la base de datos de los establecimientos carcelarios en Colombia, el tiempo que duró privado de la libertad y recluido en este establecimiento carcelario el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, identificado con cédula de ciudadanía número 9.734.136 de y por orden de qué autoridad judicial.

III. Testimoniales:

Con todo respeto y con el fin de demostrar los perjuicios materiales y extrapatrimoniales sufridos por el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO**



CASTAÑO, y los perjuicios extrapatrimoniales sufridos por su familia, solicitamos a su despacho se sirva citar a las siguientes personas para que testifiquen sobre el dolor y el sufrimiento que padeció el ya nombrado **y su familia**, durante el tiempo en que estuvo privado injustamente de su libertad:

1. Solicito se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, a la señora **AMPARO ROMERO URBANO**, quien se identifica con la C.C No. 31.185.479 de Tuluá (V), quien podrá testificar al menos de los sufrimientos sociales y morales a los cuales se vieron abocados el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** y sus familiares, ya que se trata de una persona cercana de aquellos que pudo darse cuenta de lo sucedido.
2. Solicito se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, el señor **JHONY ALEXANDER RUIZ MORALES**, quien se identifica con la C.C No. 1.116.251.108 de Tuluá (V), quien podrá testificar al menos de los sufrimientos sociales y morales a los cuales se vieron abocados el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** y sus familiares, ya que se trata de una persona cercana de aquellos que pudo darse cuenta de lo sucedido.
3. Solicito se sirva citar al Despacho, previa fijación de fecha y hora, a la señora **GRACIELA CORREALES VALENCIA**, quien se identifica con C.C. No. 29.808.026 de Sevilla (V), quien podrá testificar al menos de los sufrimientos sociales y morales a los cuales se vieron abocados el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** y sus familiares, ya que se trata de una persona cercana de aquellos que pudo darse cuenta de lo sucedido.

Los anteriores pueden ser localizados por medio de la suscrita y ser notificados en la misma dirección.

IV. Periciales:

VALORACIÓN PSIQUIATRICA O PSICOLOGICA: Teniendo en cuenta que la base fundamental de esta demanda es el reconocimiento de perjuicios morales y los del daño a la vida de relación, consideramos de extrema importancia que la parte demandante sea apoyada por el Estado, através del Instituto Nacional de Medicina Legal, para que a través de sus expertos, o peritos en la materia, se determine cuales habrían sido los daños psiquiatricos y/o psicológicos que le fueran causados al señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO Y A SU FAMILIA**, debido a la privación injusta de su libertad, por error judicial que sufriera el mismo, pues a pesar del paso del tiempo, con toda seguridad el perito puede vislumbrar el daño ocasionado que en algunas circunstancias es permanente.

Para el desarrollo de esta prueba pericial, se hace necesario el apoyo del Instituto de Medicina Legal del Valle del Cauca, en el lugar más cercano a la residencia del demandante, que lo es municipio de Tuluá – Valle o en su defecto un profesional en psicología o psiquiatría forense que estuviera adscrito al listado de auxiliares de la justicia.

COMPETENCIA Y CUANTÍA

Es competencia del Juez Contencioso Administrativo del Circuito Reparto de Guadalajara de Buga – Valle, por la naturaleza de la acción, por el lugar donde ocurrieron los hechos que originaron el proceso penal que lo fue el municipio de Tuluá – Valle, por los despachos judiciales donde se produjeron los fallos judiciales a través de los cuales se privó injustamente de la libertad al señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** y por ser el lugar donde se cometieron las omisiones y los errores judiciales que lo fue también la ciudad de Tuluá – Valle, por las normas de competencia del Código Contencioso Administrativo y la ley 270 de 1996, con soporte además en la Sentencia del Consejo de Estado del 09 de Septiembre de 2008, M.P. Mauricio Fajardo Gómez. Rad. 110010326000200800009 00 y especialmente por la cuantía que se deriva de aquella, conforme al Código Contencioso Administrativo artículo 155 No. 6 de la Ley 1437 de 2011, que indica que en los procesos de esta índole, “*cuando la cuantía no exceda de (500) salarios mínimos legales mensuales vigentes*”, la cual se determina de la siguiente manera:

A) Indemnización causada:

1. POR PERJUICIOS MATERIALES:

Los cuales comprenden el **Lucro Cesante y el Daño Emergente:**

PARA EL SEÑOR OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO

1.1. DAÑO EMERGENTE:

Son aquellos daños patrimoniales que se producen con inminencia y que en caso, lo constituyen los emolumentos que debió utilizar el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, para defenderse de la grave acusación que se hacía en su contra por parte de la fiscalía general de la nación a través de su delegada novena seccional de la ciudad de Tuluá, y que afectó a toda su familia cercana.

Costos Honorarios Abogado Defensor: \$ 12.000.000= M/C.

Total Daño Emergente: \$ 12.000.000=M/C.

Total Perjuicios Mínimos Materiales a Favor del señor OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO: \$12.000.000.00 =M/C.

ADENDA: Es importante manifestar que no se hace relación del lucro cesante, ya que tratándose de un Agente de Tránsito de la ciudad de Tuluá, al momento que fuera reintegrado a su puesto, la administración municipal le devolvió los dineros dejados de percibir durante su encarcelación.

2. POR PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES – INMATERIALES.

PARA EL SEÑOR OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO:

2.1 Perjuicios morales:

2.2 Por concepto de Perjuicios Morales teniendo en cuenta la aflicción interna que sufrió al verse privada injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y por la clase de delito que lo ha estigmatizado en toda la sociedad (porte ilegal de estupefacientes). **En TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. (\$22.552.250=M/C)**, actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A., mediante los mecanismos, fórmulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado, esto porque el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, no solo fue detenido y privado de su libertad injustamente por espacio de 70 días, sino que además, debió sufrir el largo proceso penal, con la consabida angustia de no saber que podría suceder con su libertad, hasta que finalmente el proceso penal terminó con su **ABSOLUCION** a través del mecanismo de la preclusión, contenido en el art. 332 de la ley 906 de 2004.

Subtotal Mínimo: \$22.552.250=M/C

2.3 Daño a la vida en Relación: a su profesión como Agente de Tránsito

El señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, de 35 años de edad, un hombre dedicado fielmente a su trabajo, quien incluso en el proceso penal demostró ser el más eficiente de los agentes de tránsito de la ciudad de Tuluá, se vio afectado de manera insospechada por la clase de detención y encarcelación que se le hizo sufrir, específicamente por haber supuestamente incurrido en delito que tenía que ver con su actividad como funcionario público (concusión), y con ello, la notable fisura en su entorno social, porque como a ninguno se le vociferó en medios locales y regionales su captura, siendo aquello una afrenta contra la vida de relación, que incluso aun no supera, por lo cual consideramos que frente a esta clase de perjuicio inmaterial, se le deberían pagar por indemnización **CIEN SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES (\$64.350.000=M/C)**, o el mayor valor que se fije por

los lineamientos del Consejo de Estado. Teniendo la claridad de que al verse manchado el buen nombre de mi mandante, por el rechazo social que se presenta hacía las personas que estuvieron privadas de su libertad y afectando de igual manera su desempeño como Agente de Tránsito, cosa bastante conflictiva en el entorno social que vivimos puesto que el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO** tiene la referencia de haber estado en un cárcel varios meses lesionando su derecho de la personalidad (honor e imagen).

Subtotal Mínimo: \$64.435.000.oo=M/C.

**Subtotal Mínimo por extra-patrimoniales o inmateriales
\$86.902.250.oo=M/C.**

**PARA LA SEÑORA LUZ ESTELLA FERNÁNDEZ CORRALES COMPAÑERA
PERMANENTE DE OSCAR FERNANDO CASTAÑO:**

Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su compañero, el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, privado injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **En TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES. (\$22.552.250=M/C)**, actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A., mediante los mecanismos, fórmulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$22.552.250=M/C.

PARA SU HIJASTRO JUAN CAMILO CHAMORRO FERNANDEZ

Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su señor Padrastro, el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, privado injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **EN TRES Y MEDIO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES \$2.255.225=M/C**, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$2.255.225=M/C.

**PARA LA SEÑORA MARIA OFELIA CASTAÑO MADRE DE OSCAR FERNANDO
CASTAÑO:**

Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su hijo, el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, privado injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **En TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES**

PRIMERA
I-VALLE
CIRCULO

LEGALES VIGENTES. (\$22.552.250=M/C), actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A., mediante los mecanismos, fórmulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$22.552.250=M/C.

PARA EL SEÑOR CARLOS LONDOÑO PADRE DE OSCAR FERNANDO CASTAÑO:

Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su hijo, el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, privado injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **En TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.** (\$22.552.250=M/C), actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A., mediante los mecanismos, fórmulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$22.552.250=M/C.

PARA LA MENOR KISSENA LONDOÑO CASTAÑO HERMANA DE OSCAR LONDOÑO CASTAÑO:

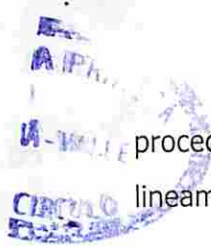
Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su hermano, el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, privado injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **En TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.** (\$22.552.250=M/C), actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A., mediante los mecanismos, fórmulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$22.552.250=M/C.

PARA EL SEÑOR LUIS ALFREDO IBARRA CASTAÑO HERMANO DE OSCAR LONDOÑO CASTAÑO:

Perjuicios morales teniendo en cuenta el dolor moral, la angustia y la aflicción interna que sufrió al ver a su hermano, el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, privado injustamente de su libertad sin ningún soporte jurídico válido y teniendo que sufrir con los comentarios de la sociedad. **En TREINTA Y CINCO SALARIOS MINIMOS MENSUALES LEGALES VIGENTES.** (\$22.552.250=M/C), actualizados al día del pago, de conformidad con lo previsto en el art. 187 del C.C.A., mediante los mecanismos, fórmulas y

PRIMERA
I-VALLE
CIRCULO



procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, o el mayor valor que se fije por los lineamientos del Consejo de Estado.

Subtotal Mínimo: \$22.552.250=M/C.

Total Perjuicios Extra-patrimoniales – Inmateriales: \$ 189.918.725=M/C

RESUMEN DE PERJUICIOS:

Perjuicios Patrimoniales para **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO:**

\$ 12.000.000.00=M/C

Perjuicios extra patrimoniales para el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO:**

\$ 86.902.250=M/C

Perjuicios extra patrimoniales para la señora **LUZ ESTELLA FERNANDEZ CORRALES:**

\$22.552.250=M/C.

Perjuicios extra patrimoniales para el menor **JUAN CAMILO CHAMORRO FERNANDEZ:**

\$2.255.225=M/C.

Perjuicios extra patrimoniales para el señor **CARLOS LONDOÑO MARULANDA:**

\$22.552.250=M/C.

Perjuicios extra patrimoniales para la menor **KISSENIA LONDOÑO CASTAÑO:**

\$22.552.250=M/C.

Perjuicios extra patrimoniales para el señor **LUIS ALFREDO IBARRA CASTAÑO:**

\$22.552.250=M/C.

Total Perjuicios Mínimos: \$201.918.725.00=M/C

En consecuencia, la estimación razonada de la cuantía es en suma superior a los **DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE \$201.918.725.00=M/C**, la cual deberá actualizarse – indexarse hasta la fecha del pago efectivo, de conformidad con lo previsto en el art. 187 de la Ley 1437 de 2011, mediante los mecanismos, formulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, esto porque el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, no solo fue detenido injustamente por espacio de ciento treinta y un (131) días, sino, porque además ella y su familia, sufrieron la vergüenza y el rechazo social a raíz del mencionado proceso penal, del cual finalmente fue absuelto.

En reciente jurisprudencia sobre el pago de los perjuicios extra-patrimoniales por la privación injusta de la libertad el Honorable Consejo de Estado ha dicho que:





Respecto de la cuantía de la indemnización de este perjuicio inmaterial, debe recordarse que, de conformidad con lo expresado en sentencia del 6 de septiembre de 2001, esta Sala ha abandonado el criterio según el cual se estimaba procedente la aplicación analógica del artículo 106 del Código Penal de 1980, para establecer el valor de la condena por concepto de perjuicios morales. Se ha considerado, en efecto, que la valoración de dicho perjuicio debe ser hecha por el juzgador, en cada caso, según su prudente juicio y se ha sugerido la imposición de condenas por la suma de dinero equivalente a 100 salarios mínimos legales mensuales, en los eventos en que aquél se presente en su mayor grado de intensidad⁸.

La jurisprudencia del Consejo de Estado ha considerado que, en casos de detención domiciliaria o en establecimientos carcelarios, se presume el dolor moral, la angustia y aflicción de la víctima directa del daño, por la privación injusta de la libertad⁹. Así mismo, dicho dolor se presume respecto de sus seres queridos más cercanos, conforme a las reglas de la experiencia, tal como la Sala lo ha reconocido en diferentes oportunidades¹⁰. Por lo anterior y teniendo en cuenta las circunstancias fácticas descritas, se impone concluir que el actor no está en la obligación de soportar el daño que el Estado le irrogó y que éste debe calificarse como antijurídico, lo cual determina la consecuente obligación para la Administración de indemnizar o resarcir los perjuicios causados a los demandantes.¹¹

OPORTUNIDAD DE LA PRESENTE DEMANDA DE REPARACIÓN DIRECTA

El medido de control de reparación directa tiene una caducidad de 2 años, contados a partir de la ocurrencia de los hechos, que en este caso comienza a contarse a partir de la fecha en que se produjo el **Fallo interlocutorio No 081 del 5 de Marzo de 2014 producido por el Juez Tercero Penal del Circuito de la ciudad de Tuluá – Valle, con efectos de cosa juzgada que decidió la preclusión del proceso judicial penal que fuera adelantado en su contra por la fiscalía general de la Nación, por el presunto delito de Concusión art. 404 del C.P, y en favor del señor OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, cargo penal que le fuera imputado injustamente, por cuanto en el proceso penal se estableció que no había incurrido en ninguna conducta constitutiva de delito y además, no existió ninguna prueba en su contra, y como quiera, que contra esta decisión no se interpuso recurso de apelación, se declaró legalmente ejecutoriada la misma, y las partes quedaron notificadas en estrados, ya que no es admisible la ejecutoria parcial de las providencias, tal como lo ha afirmado el Consejo de Estado y la Corte Suprema de Justicia, por lo tanto estoy en tiempo de formular la presente demanda.

NATURALEZA DEL CONTENCIOSO

Se ejercita el medio de control de la Reparación Directa previsto en el Artículo 140 del Código Contencioso Administrativo – Ley 1437 de 2011.

⁸ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, sentencia del 6 de septiembre de 2001, expediente 13.232-15.646, actor: Belén González y otros – William Alberto González y otra.

⁹ Entre otras, Sentencia de 14 de marzo de 2002, exp. 12.076.

¹⁰ Sentencia de 20 de febrero de 2.008, expediente 15.980.

¹¹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección A, sentencia del 27 de enero de 2012, expediente 22701, actor: Secundino Mora Patiño y otros.



DERECHO

Además de las normas que se han citado, invoco el artículo 90 de la Constitución Política de Colombia, Ley 270 de 1996 reformada por la Ley 1285 de 2009, los artículos 140 y 164 Literal I del C.C.A. Ley 1437 de 2011, y demás disposiciones concordantes.

PROCEDIMIENTO

Deberá seguirse el procedimiento previsto en los artículos 179 y subsiguientes del C.C.A Ley 1437 de 2011.

JURAMENTO ESTIMATORIO DE LA CUANTÍA

Resulta ahora necesario para esta representación judicial - manifestar bajo la gravedad del juramento que además se considera prestado con la presentación de este escrito, que la estimación razonada de la cuantía que a continuación se detalla es la pretendida razonadamente por las partes aquí demandantes, de conformidad con el **artículo 206 de la Ley 1564 del 12 de julio de 2012.**

En consecuencia, la estimación razonada de la cuantía es en suma superior a los **DOSCIENTOS UN MILLONES NOVECIENTOS DIEZ Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS MONEDA CORRIENTE \$201.918.725.00=M/C**, la cual deberá actualizarse – indexarse hasta la fecha del pago efectivo, de conformidad con lo previsto en el art. 187 de la Ley 1437 de 2011, mediante los mecanismos, formulas y procedimientos adoptados por el Consejo de Estado, esto porque el señor **OSCAR FERNANDO LONDOÑO CASTAÑO**, no solo fue detenido injustamente por espacio de ciento treinta y un (131) días, sino, porque además ella y su familia, sufrieron la vergüenza y el rechazo social a raíz del mencionado proceso penal, del cual finalmente fue absuelto.

ANEXOS

1. Poderes legalmente conferidos, con los cuales se acredita la personería de la suscrita con expresas facultades para conciliar.
2. Los documentos relacionados en el acápite de pruebas.
3. Recibos originales del envío de la petición de conciliación, cursada a las entidades convocadas.
4. Acta de la audiencia prejudicial del día veintidós (22) de octubre de 2015 que se llevó a cabo ante el Procurador 60 Judicial I delegado en asuntos Administrativos para lo competente en el circuito de Buga (V).
5. Constancia del Procurador 60 Judicial I delegado en lo Administrativo de la ciudad de Cali (V) en la cual consta que se adelantó todo el trámite legal correspondiente,

para dar por cumplido el requisito de procedibilidad exigido por el artículo 13 de la Ley 1285 de 2009, para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo en acción de reparación directa por los hechos acá mencionados.

NOTIFICACIONES

- ✓ **La Nación - Rama Judicial:** Dirección Ejecutiva de la Administración Judicial Seccional Cali, Carrera 5 No. 12-42 piso 5, Tel: 8846342.
dsajclinotif@cendoj.ramajudicial.gov.co
- ✓ **Fiscalía General de la Nación Seccional Valle,** Calle 10 No. 05 – 77 piso 8 Edificio San Francisco Teléfono: 392 79 00 Cali – Valle.
disfiscal@fiscalia.gov.co
- ✓ **AGENCIA NACIONAL DE DEFENSA JURIDICA DEL ESTADO:** Carrera 7 No.75 - 66 Piso 2 y 3. Teléfono: 2558955 Bogotá D.C.
mesaayuda@defensajuridica.gov.co y
mesaayuda.litigob@minjusticia.gov.co
- ✓ **Los demandantes y su apoderada judicial:** en la Calle 32 No. 26 – 39 B/Salesiano de la ciudad de Tuluá (V), telefax: 225 46 85, o en la secretaría de su despacho. Correo electrónico: **claudiarestrepoabogada@gmail.com**

Atentamente,


CLAUDIA LILIANA RESTREPO ESPINOSA
C.C No. 29.873.663 de Tuluá (V)
T.P No. 173.108 del C.S.J.

ARIA PRIMERA
TULUÁ VALLE
DEL CIRCULO

RAMA JUDICIAL
CONSEJO SUPERIOR DE
DIRECCION SECCIONAL
JUDICATURA
SECCIONAL VALLE

06 NOV. 2015
RECIBIDO
No. 